

[CLICK HERE TO SEE
THE ENGLISH VERSION](#)

DEFIENDE
VENEZUELA

BOLETÍN ESPECIAL

FEBRERO DE 2026



PROMULGACIÓN DE LA LEY DE AMNISTÍA PARA LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA

El 19 de febrero de 2026, tuvo lugar la aprobación en segunda discusión por la Asamblea Nacional, y posterior promulgación por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

SOBRE LAS AMNISTÍAS EN GENERAL Y SUS EFECTOS SEGÚN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO VENEZOLANO

Las amnistías son manifestaciones legislativas contemporáneas del denominado “derecho de gracia”, de origen monárquico, adoptadas como correctivo ante errores o contradicciones en el ejercicio del ius puniendi del Estado, afectando la necesidad de pena.¹

Las amnistías tienen por objeto hechos determinados y son usuales en contextos de ruptura o cambio profundo de régimen político y jurídico, considerando no delictivas conductas con especial significado político-social.²

En estos contextos transicionales, la amnistía tiene como limitación general la incapacidad de otorgar impunidad sobre crímenes internacionales, como los crímenes de lesa humanidad, de guerra o de genocidio.³ En Venezuela, además de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, tampoco son susceptibles de amnistía las violaciones graves a los derechos humanos (artículo 29 de la Constitución).

El efecto de la amnistía es la extinción total de la acción penal, haciendo cesar la pena y todas sus consecuencias (artículo 104 del Código Penal). Desde luego, verificada la amnistía, cesa también cualquier medida de coerción personal, por lo que los sujetos beneficiados deben recibir una libertad sin restricciones (artículo 29 del Código Orgánico Procesal Penal).

LEY DE AMNISTÍA PARA LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA

La recién publicada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática (LACD) otorga la medida de gracia por hechos constitutivos de delitos o faltas cometidos a partir del 1 de enero de 1999 y hasta el 19 de febrero de 2026, siempre que hayan sido perpetrados en contextos específicos de inestabilidad política en los años 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, de 2016 a 2021, 2017, 2019, 2023, 2024 y 2025 (artículo 8 LACD).

No obstante, fueron expresamente excluidas las conductas relacionadas con manifestaciones políticas y hechos violentos ocurridos entre enero y abril de 2019, cuando hayan constituido el delito de rebelión militar. De ello se sigue que, en estos casos, solo están excluidos de la medida los militares procesados o condenados por hechos pertenecientes a dicho marco temporal bajo el concreto cargo de rebelión militar, debiendo proceder la amnistía en causas militares por delitos o contextos distintos.

También fueron explícitamente excluidos los hechos constitutivos de violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de guerra o de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, narcotráfico y corrupción, así como aquellos que hayan consistido en la promoción de acciones armadas contra Venezuela por Estados, corporaciones o personas extranjeras, aunque no está claro a qué figura de delito se alude en esta última excepción (artículo 9 LACD).

En el ámbito personal, la ley aplica a toda persona que esté siendo o pueda ser procesada por los hechos descritos, aunque exige que el sujeto “se encuentre a derecho” y haya cesado en la ejecución del hecho punible (artículo 7 LACD).

En cuanto a sus efectos, la amnistía contemplada en la ley extingue la acción penal y, como consecuencia, extingue también cualquier medida de coerción personal en contra del sujeto procesado (artículo 10 LACD).

El instrumento establece un procedimiento judicial para la solicitud de la amnistía y su revisión por el tribunal de la causa, o la

Corte de Apelaciones en casos de condena, en un lapso no mayor a 15 días continuos (artículo 11 LACD).

El recién promulgado instrumento ha sido recibido con cierto escepticismo por familiares de las víctimas arbitrariamente detenidas y algunos sectores de la sociedad civil, que lo consideran en exceso selectivo en los supuestos de hecho susceptibles del beneficio y que denuncian demoras en su implementación. Estas críticas han estimulado protestas y huelgas de hambre frente a algunos centros de detención, mientras se espera que se produzcan nuevas liberaciones.

Ciertamente, a pesar de que la ley comienza estableciendo un marco temporal de aplicación general a partir del 1 de enero de 1999, la excesiva especificación de los contextos en los cuales la amnistía es aplicable, de conformidad con el artículo 8, termina por imponer diferenciaciones que pudieran resultar discriminatorias en aquellos casos que puedan considerarse no abarcados por los contextos enunciados.

Un sector especialmente afectado de manera diferencial es el de los procesados y condenados militares, en ocasiones expresamente excluidos de la aplicación de la ley, particularmente en los casos relativos a hechos ocurridos entre enero y abril de 2019, cuando hayan constituido el delito de rebelión militar.

Está también por determinarse la receptividad de las solicitudes de amnistía por los tribunales venezolanos y su interpretación de los supuestos de hecho de la ley, así como su procedencia en casos concretos. Hasta la fecha de elaboración de este boletín, ya los tribunales de causa habrían recibido más de 9000 solicitudes en el marco de la ley.

En tal sentido, el extenso y detallado catálogo provisto en el artículo 8, así como las numerosas y dispersas excepciones a la procedencia de la medida de amnistía, plantean un reto interpretativo que deja un margen considerable de apreciación a los jueces de causa.

En todo caso, la ley parece de escaso valor como instrumento para una transición política, pues se concede la medida de gracia a las víctimas del período de abusos que se pretende superar, sin que se observen esfuerzos por asegurar la rendición de cuentas por los perpetradores. En las transiciones auténticas, lo usual es ofrecer medidas de gracia, parciales y limitadas, a los perpetradores y no a las víctimas.

Es preciso valorar que, en muchos casos, las personas hoy beneficiadas por la ley no habían ejecutado conductas punibles bajo la legislación vigente, por lo que se trataba de persecuciones y detenciones que desde un principio eran arbitrarias.

Con todo, el cierre de procesos penales y medidas de coerción inicuos es un evento en sí mismo positivo para la construcción de una sociedad democrática, aunque esté lejos de asegurar el inicio de una transición política al Estado de derecho.

SOBRE DEFIENDE VENEZUELA

Defiende Venezuela es una organización de litigio internacional en derechos humanos fundada en el año 2017.

Si desea comunicarse con nosotros, no dude en contactarnos a través de nuestras redes sociales: @defiendeve o del correo electrónico: gdavila@defiendevenezuela.org.



SPECIAL BULLETIN

FEBRUARY 2026



ENACTMENT OF THE AMNESTY LAW FOR DEMOCRATIC COEXISTENCE

On February 19, 2026, the National Assembly approved the “Amnesty Law for Democratic Coexistence” in its second reading, and it was subsequently enacted by the acting president, Delcy Rodríguez.

ON AMNESTIES IN GENERAL AND THEIR EFFECTS UNDER VENEZUELAN LAW

Amnesties are contemporary legislative manifestations of the so-called “right of grace,” of monarchical origin, adopted as a corrective measure for errors or contradictions in the exercise of the State's *ius puniendi*, affecting the need for punishmentⁱ.

Amnesties target specific conducts and are common in contexts of rupture or profound change in political and legal regimes, considering behaviors with special political and social significance to be non-criminal. ⁱⁱ

In these transitional contexts, amnesty is generally limited by its inability to grant impunity for international crimes, such as crimes against humanity, war crimes, or genocideⁱⁱⁱ. In Venezuela, in addition to war crimes and crimes against humanity, serious human rights violations are also not eligible for amnesty (Article 29 of the Venezuelan Constitution).

The effect of amnesty is the total extinction of criminal proceedings, putting an end to the penalty and all its consequences (Article 104 of the Venezuelan Criminal Code). Of course, once amnesty has been verified, any measures of personal coercion also cease, meaning that those who benefit from it must be granted unrestricted freedom (Article 29 of the Venezuelan Organic Code of Criminal Procedure).

AMNESTY LAW FOR DEMOCRATIC COEXISTENCE

The recently published Amnesty Law for Democratic Coexistence (ALDC) grants pardon for crimes or offenses committed between January 1, 1999, and February 19, 2026, provided they were perpetrated in specific contexts of political instability during the years 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, from 2016 to 2021, 2017, 2019, 2023, 2024, and 2025 (Article 8 ALDC).

However, conducts related to political demonstrations and violent acts that occurred between January and April 2019, in cases where they may have constituted the crime of military rebellion, were expressly excluded. It follows that, in these cases, only military personnel prosecuted or convicted for events occurring during that time frame under the specific charge of military rebellion are excluded from the measure, and amnesty must proceed in military cases for different crimes or contexts.

Acts constituting serious human rights violations, war crimes or crimes against humanity, intentional homicide, grievous bodily harm, drug trafficking, and corruption were also explicitly excluded, as were those involving the promotion of armed actions against Venezuela by foreign states, corporations, or individuals, although it is unclear what type of crime is referred to in this last exception (Article 9 ALDC).

In terms of personal scope, the law applies to any person who is being or may be prosecuted for the acts described, although it does require the subject to be “in compliance with the law” and to have ceased committing the punishable act (Article 7 ALDC).

In terms of its effects, the amnesty provided for in the law extinguishes criminal proceedings and, as a result, also extinguishes any coercive measures against the defendant (Article 10 ALDC).

The instrument establishes a judicial procedure for requesting amnesty and its review by the court hearing the case, or the Court of Appeals in cases of conviction, within a period not exceeding 15 consecutive days (Article 11 ALDC).

The recently enacted instrument has been met with some skepticism by relatives of arbitrarily detained victims and some sectors of civil society, who consider it overly selective in terms of the cases eligible for relief. They also denounce delays in its implementation. These criticisms have sparked protests and hunger strikes outside some detention centers, while new releases are expected.

Certainly, although the law begins by establishing a general time frame for application beginning on January 1, 1999, the excessive specification of the contexts in which amnesty is applicable, in accordance with Article 8, ultimately imposes distinctions that could be discriminatory in cases that may be considered outside the scope of the contexts listed.

One sector that is particularly affected in a differential manner is that of military personnel who have been prosecuted and convicted, who are sometimes expressly excluded from the application of the law, particularly in cases relating to events that occurred between January and April 2019, where they may have constituted the crime of military rebellion.

The receptiveness of Venezuelan courts to amnesty requests and their interpretation of the factual scenarios covered by the law, as well as their applicability in specific cases, are also yet to be determined. As of the date of this bulletin, the courts hearing the cases had already received more than 9,000 requests under the law.

In this regard, the extensive and detailed catalog provided in Article 8, as well as the numerous and scattered exceptions to the applicability of the amnesty measure, pose an interpretive challenge that leaves considerable room for discretion to the judges hearing the case.

Be that as it may, the law seems of little value as an instrument for political transition, since amnesty is granted to the victims of the period of abuse that is supposed to be overcome, without any apparent effort to ensure accountability for the perpetrators. In genuine transitions, it is customary to offer partial and limited pardons to perpetrators, not victims.

It should be noted that, in many cases, the people who now benefit from the law had not committed any punishable acts under the legislation in force, meaning that the prosecutions and arrests were arbitrary from the outset.

All in all, the closure of criminal proceedings and unjust coercive measures is in itself a positive step towards building a democratic society, although it is far from guaranteeing the start of a political transition to the rule of law

Full text of the law: [here](#).

CLICK HERE TO SEE
THE ENGLISH VERSION



ABOUT DEFIENDE VENEZUELA

Defiende Venezuela is an international human rights litigation organization founded in 2017.

If you would like to get in touch with us, please feel free to contact us through our social media accounts: @defiendeve or by email: gdavila@defiendevenezuela.org.

